

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 20º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-7564-2023
CARATULADO	: FLORES/FISCO DE CHILE

Santiago, seis de Mayo de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

**Al folio 1**, comparecen doña Andrea Gattini Zenteno, abogada, domiciliada en Doctor Sótero del Río 326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de doña Violeta Susana Flores Martínez, pensionada, domiciliada en Belisario Prat 1460, departamento 703, comuna de Independencia, Región Metropolitana; quien de acuerdo a lo establecido en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4º, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

**Al folio 7**, consta la notificación del demandado.

**Al folio 8**, se contestó la demanda.

**Al folio 12**, se evacuó la réplica.

**Al folio 16**, se evacuó la dúplica.

**Al folio 17**, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos, notificándose a las partes con fecha 16 de enero de 2024.

**Al folio 23**, se resolvió reposición contra la interlocutoria de prueba.

**Al folio 29**, se rindió prueba testimonial.

**Al folio 32**, se citó a las partes a oír sentencia.



## CONSIDERANDO.

**PRIMERO:** Que, el actor comienza relatando en primera persona los hechos vividos por doña Violeta Flores:

*“Para el año 1974 yo había entablado una amistad con un grupo de personas que vivían en la casa que quedaba atrás de la mía, todos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Yo vivía con mi madre y mis hermanos en un sitio ubicado en el paradero 21 y ½ de Vicuña Mackenna, en la calle John Kennedy N°87, comuna de Puente Alto, y pasábamos muchas dificultades económicas que a veces significaban que no podíamos costear las cosas más básicas, por lo que a veces se nos hacía difícil sobrevivir. Ellos, que vivían en una especie de parcela atrás, se preocupaban mucho de mí y me daban comida, y me enseñaban porque querían que me educara todo lo que más pudiera. Con uno de ellos a través del tiempo formé una linda relación amorosa. Su nombre era Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, quien fue asesinado tiempo después por agentes del Estado de Chile. En adelante me referiré a él como Gabriel, porque así lo llamaba yo. Él fue mi compañero y soporte, con quien yo quise un futuro juntos.*

*Solo por involucrarme con estos amigos que tanto me ayudaron, y sin yo tener militancia política alguna, fui detenida por funcionarios del Ejército de Chile vestidos de civil, quienes se identificaron como funcionarios del SIM. Pasé por el Regimiento Tacna, donde sufrí las más salvajes torturas físicas, sexuales y psicológicas. Luego me mandaron a la Cárcel de Mujeres, y luego al Estadio Chile. Pasé meses privada de libertad sin ningún motivo.*

*Todos estos hechos provocaron que nos cambiáramos de casa con mi madre y hermanos porque yo vivía aterrada. No podía dormir ni salir a la calle. Me escondía debajo de la cama y salía solamente a comer y dormir. Era ya el verano de 1975 para ese entonces.*

*Ya en esta casa a la cual nos cambiamos, volví a tener contacto con mis amigos miristas, quienes manifestaban su enorme preocupación por mí, y me ayudaron a tratar mis infecciones, consecuencias de las terribles torturas, que ya eran crónicas. Decidimos volver a intentar hacer funcionar nuestra relación con Gabriel, con quien nos amábamos profundamente. Decidimos irnos a vivir juntos con mi familia, pero no pudimos estar mucho en ese lugar porque tomaron detenido a uno de sus amigos y tuvimos que arrancar. Nos quedamos en la casa de una amiga*



Foja: 1

*un par de meses, y ahí me puse a ayudar a los del MIR pero solamente a buscarles casa a los que estaban en la misma situación que nosotros, porque no podía creer la injusticia que se estaba cometiendo. Obligados a tener que vivir escondidos, siempre asustados.*

*Quedé embarazada en el verano de 1976. Fue una sorpresa para ambos pero también una noticia feliz. Gabriel me dejó a cargo de sus padres porque, por sus actividades políticas, no quería ponerme en peligro. No pude saber mucho más de él hasta que supe de su detención, la que ocurre el día 25 de mayo de 1976 en la comuna de Providencia. Durante todo ese tiempo yo ni siquiera me había podido controlar mi embarazo, vivíamos en el terror de que le pudieran hacer algo a nuestro bebé.*

*La detención de Gabriel significó un cambio drástico en toda mi vida. Tuve que volver a la casa de mi madre, y comenzaron los hostigantes seguimientos en contra de mi persona. Me seguían constantemente para todas partes, pero decidí seguir con mi embarazo con la ayuda de la mamá de Gabriel. Mi guagua era lo que me quedaba de ese sueño de familia que tanto quería.*

*Así pasaron unos meses, hasta que un día, cuando voy subiéndome a una micro, tuve un altercado con un hombre desconocido quien provocó que me cayera de espaldas, lo que desencadenó un terror y estrés que provocaron finalmente que al día siguiente entrara en trabajo de parto. Fui al consultorio y luego derivada al Hospital Barros Luco en ambulancia. Iba acompañada solamente de una vecina ese día.*

*Cuando me entraron a la sala de parto me preguntaron si me había hecho un aborto. Les dije que no y que salvaran a mi guagua porque era hija de un detenido desaparecido. Esto lo dije por la rabia profunda e indescriptible que sentía de no saber dónde estaba mi pareja, y de verme obligada a pasar toda esa angustia completamente sola. Después que dije eso se llenó el lugar de gente. Todos tenían delantal blanco pero no sé si eran médicos, y todos me hacían preguntas, respecto de las cuales yo no tenía ninguna respuesta.*

*Tuve a mi hija con sólo dos personas en el pabellón, pero jamás la vi porque nunca me la mostraron. Yo la escuché llorando unas dos horas seguidas, porque estaba al otro lado de un biombo en la misma sala de parto. Yo no me podía mover, y me dejaron en ese pabellón sola. Luego la dejé de escuchar. Llegó una auxiliar que me dijo que había tenido una niña y que había muerto, y que me tenía que ir porque sino me iría muy mal. En ese momento entré en pánico y me fui, no*



Foja: 1

*podía ni siquiera pensar, solo sentía mucho miedo y no entendía lo que había pasado.*

*No tuve apoyo familiar alguno. Mi madre, cuando supo, solamente dijo que me olvidara y que no teníamos dinero siquiera para poder costear un funeral y entierro. Tuve que irme a la casa sin entender nada de lo que había pasado. Pude volver recién unos tres días después para poder recuperar a mi bebé, pero me dijeron que no tenían ningún registro de que yo hubiera pasado por el hospital. Incluso me dijeron que quizás ese día estaba ebria y no recordaba bien. Me quitaron todo.*

*Cuando pude ya hablar, me comuniqué con los papás de Gabriel y les conté lo que me había pasado. Me fue a ver su mamá a la casa. Ella nunca me preguntó qué es lo que le había pasado a la niña. Le conté todo lo que había pasado, pero ella no fue capaz de hacerme ninguna pregunta. Estábamos todos destrozados con la noticia. La situación se hizo tan insostenible para mí, psicológica y emocionalmente, que tomé la decisión de irme de mi casa. Pensaba en Gabriel y como necesitaba tenerlo para sobrellevar la situación, me sentía perdida y desamparada.*

*Me fui a la casa de la esposa de un amigo de Gabriel, José Calderón Ovalle, a quien ya habían desaparecido para ese entonces. En ese lugar cuidaba a sus hijas.*

*Entre lo que me había pasado a mí, y lo que le hicieron a Gabriel (y, por lo tanto, a mi familia que empezaba, la familia con la que tanto soñé), simplemente no fui capaz de hacer más gestiones para encontrar a mi hija (me convencí a mí misma que era una niña), no podía vivir con el miedo. Sentía que, si denunciaba cualquier cosa, me iban a volver a detener, y quizás me desaparecieran finalmente, igual que a Gabriel.*

*Pude estudiar con muchísimo esfuerzo. Saqué el 4to medio recién a los 48 años. Lo hice porque tenía que demostrarme a mí misma que podía y porque le había prometido a Gabriel que lo haría. Él me ayudaba con las tareas y me enseñaba todo lo que más podía. Siempre buscaba que yo explotara al máximo mis capacidades. Finalmente, mis problemas psicológicos y mis traumas impidieron que terminara mi carrera de técnico en enfermería.*

*En lo laboral y económico todo lo vivido me ha significado muchos problemas. Yo era trabajadora de aseo, y no podía salir de ahí porque no tenía estudios. Nunca*



Foja: 1

*pude tener una vida medianamente cómoda. Me arrebataron a quien me ayudaba económicamente, quien podía cubrir mis necesidades básicas, con quien yo quería formar una familia en el futuro, el que me hacía sentir protegida y querida. He pasado por muchas necesidades toda mi vida, ni siquiera tenía para poder comer, ni menos para poder movilizarme en locomoción. Tampoco tuve el apoyo emocional que necesitaba luego de todo lo que pasé.*

*En lo emocional el daño ha sido tremendo. Me casé para volver a tener un hijo, era una necesidad imperiosa mía. Tuve dos hijos. No duré mucho tiempo en mi matrimonio. Fue un matrimonio abusivo, de un maltrato psicológico muy grande por reprocharme lo que me había pasado.*

*Pasé muchos años en terapia, a la cual aún asisto. Me diagnosticaron estrés post traumático. A veces me desoriento y entro en un estado crepuscular. Siento un cansancio permanente, un pesar y un dolor en el alma. Sufro mucho del estómago. Sufrí muchos años hasta que me operaron de la vesícula. También estuve unos cuatro meses en terapia en el ILAS, pero las terapias de grupo no me servían porque no puedo estar en contextos donde tenga que recordar.*

*Todo esto también ha repercutido en mi vida familiar y mis relaciones interpersonales. Con mis hijos he sido muy aprehensiva, muy sobre protectora. No tengo amigos porque no confío en la gente, siento que me van a dañar a mí y a mis hijos. Siento siempre que me pueden secuestrar a mí o a mi familia.*

*Vivo con una impotencia enorme todos los días. Gabriel no se merecía lo que le pasó porque era un muy buen hombre. Yo tampoco me merecía lo que pasó, que me hayan quitado a mi familia, a toda mi familia, mis sueños. Pasé por todas estas atrocidades sin saber por qué”.*

Relata, que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como “Informe Rettig”, ha establecido respecto a Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, lo siguiente:

*“A fines de mayo de 1976 fueron asimismo detenidos y posteriormente desaparecidos otros tres militantes del MIR:*

*El 25 de mayo de 1976, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo fue detenido en Antonio Varas con Providencia por agentes de la DINA que se movilizaban en un auto Peugeot de color blanco, siendo trasladado a Villa Grimaldi, lugar en que fue visto por varios testigos y desde el cual se le perdió el rastro.*



Foja: 1  
(...)

*La Comisión está convencida de que sus desapariciones fueron obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos”.*

Detalla, que en la causa criminal sustanciada ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Sr. Miguel Vásquez Plaza, causa Rol 2182-98 Episodio Ángel Guerrero Carrillo, se tuvieron por demostrados en el proceso los siguientes hechos:

*“a) Que, el día 25 de mayo de 1976, cerca de las 17:00 horas, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, que se encontraba en la clandestinidad, en el sector de la plaza ubicada en la intersección de calles Antonio Varas con Providencia, fue detenido cuando caminaba en compañía de una tía por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, quienes a la fuerza lo ingresaron a un vehículo, llevándolo hasta el cuartel Simón Bolívar en la comuna de La Reina y luego, al cuartel Villa Grimaldi, lugar donde fue visto por otros detenidos, y fue torturado.*

*b) Que, luego fue devuelto al mencionado cuartel Simón Bolívar, lugar en que, al tiempo después, por orden del jefe de la DINA, transmitida al jefe del cuartel y de éste a sus subordinados, se le dio muerte en el sector de Cuesta Barriga, los que lanzaron su cadáver al interior de un pique minero ubicado en el sector, lugar en que con posterioridad fueron encontrados restos óseos humanos, algunos de los cuales, sometidos a pericias médico legales, dieron identificación positiva para Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, con una probabilidad de identificación de 99,999842% pudiendo establecerse como causa de su defunción una muerte violenta por politraumatismo causado por terceros, fijándose como data de la misma un día comprendido entre el 18 de agosto de 1976 y el 24 de diciembre de 1976.*

*En efecto, de los hechos consignados anteriormente es posible segregar:*

*1.- Que, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, el día 25 de mayo de 1976 fue detenido en Antonio Varas al llegar a Providencia, cerca de las 17:00, cuando estaba en compañía de un familiar, con la que había acordado juntarse previamente en ese lugar, según se acredita con el informe policial de foja 49 a 61, declaraciones de Jeannette Guerrero Carrillo de foja 64, 826 y extrajudicial de foja 55, copia autorizada de recurso de amparo rol N° 455-76 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de foja 126 y siguientes, denuncia conforme con su original de foja 139,*



Foja: 1

*querella criminal compulsada de foja 166 y siguientes, informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conforme con su original de foja 364 y original de foja 372 y siguientes, acompañados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de foja 415 a 443, atestado extrajudicial de Custodio Del Carmen Guerrero Carrillo de foja 841, entre otros, antecedentes.*

*2.- Que, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), permanecía en la clandestinidad y era buscado por los servicios de seguridad, según se desprende de declaraciones de Jeannette Guerrero Carrillo de foja 64, 826 y extrajudicial de foja 55, dichos de Audalia Érica Quintanilla Castillo de foja 75, 146 (compulsa), 827 y policial de foja 57, atestado de Ricardo Arturo Alarcón Alarcón de foja 68, 1472 y compulsas de 231 vta., relatos de Ana del Carmen Guerrero Carrillo de foja 71 y 824, copia autorizada de recurso de amparo rol N° 455-76 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de foja 126 y siguientes, comparecencia compulsada de María Soledad Moyano Cárdenas de foja 226 y vta., testimonio de Milton Williams Lee Guerrero de foja 844 y documento agregado a foja 932, entre otros, antecedentes.*

*3.- Que, la detención fue realizada en forma violenta por personas de civil, que no se identificaron, ni exhibieron orden respectiva, ni menos dejaron constancia del procedimiento efectuado, según se extrae de declaraciones de Audalia Érica Quintanilla Castillo de foja 75, 146 (compulsa), 827 y policial de foja 57, copia autorizada de recurso de amparo rol N° 455-76 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de foja 126 y siguientes, certificado conforme con su original del Ministerio del Interior de foja 130, oficio compulsado N° 480 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago de foja 131, fotocopia confrontada de denuncia de foja 139 interpuesta ante el "S.J.L. del Crimen", reproducción de oficio de la Policía de Investigaciones de foja 145, xerocopia de oficio de la Jefatura Aérea Metropolitana de foja 149, oficio duplicado de la Dirección de Inteligencia de foja 170, oficio compulsado del Ministerio del Interior de foja 206, compulsas de oficio del Ministerio de Defensa Nacional de foja 209, fotocopia de acta de foja 255 y vta. y, copia autorizada de informe N° 4 de foja 257, entre otros, que abundan en el proceso.*

*4.- Que, su posterior desaparición fue obra de agentes del Estado, (DINA) que violaron sus derechos humanos, según se establece expresamente en "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de foja 364 "conforme con su original" y 372, atestados de Ricardo Arturo Alarcón Alarcón de foja 68, 1472 y*



Foja: 1

compulsa de 231 vta., y antecedentes acompañados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de foja 415 a 443.

5.- Que, la víctima fue llevada a los cuarteles Simón Bolívar y posteriormente a Villa Grimaldi, según consta en documento agregado a foja 932 y siguientes.

6.- Que, Ángel Guerrero Carrillo, fue visto con vida en Villa Grimaldi donde fue torturado desde el mes de mayo de 1976 hasta al menos al mes de agosto del mismo año, según dan cuenta testimonios de Ricardo Arturo Alarcón Alarcón de foja 68, 1472 y compulsas de 231 vta., atestados de Leonardo Alberto Schneider Jordán de foja 109 (copia), 727 y extrajudicial de foja 103 (fotocopia), relato “conforme con su original” de Isaac Godoy Castillo que rola a foja 404 y siguientes.

7.- Que, con el correr de los años, algunos restos óseos de la víctima fueron hallados, en una mina del sector Cuesta Barriga (Mina abandonada “Mina Los Bronces”) según peritajes, tales como, informe Pericial Integrado Individual de foja 510 a 523, informe Pericial de Genética forense de foja 524 y siguientes, informe Pericial evacuado por el “Institute of Legal Medicine” de “Innsbruck Medical University” de foja 530 a 550.

8.- Que, analizados los restos óseos, se concluyó que la muerte de la víctima fue violenta por politraumatismo causada por terceros, según establece el informe Pericial Integrado Individual de foja 510 a 523, “Informe Pericial Médico Forense” de foja 552 a 565, declaración de Macarena del Pilar Josefa Hevia Álvarez de foja 710 y siguientes, comparecencia de Ángela Andrea Melillán Sanzana de foja 712 y siguiente, testimonio de Francisco de Asís Exteberría Gabilondo, de foja 733 y, certificado de defunción de foja 978, 1000 y 2169”.

Advierte, que por estos hechos fueron condenados Juan Hernán Morales Salgado, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Sergio Orlando Escalona Acuña, Miguel Krassnoff Martchenko, Hernán Luis Sovino Maturana y José Abel Aravena Ruiz, condenas que fueron confirmadas por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de fecha de 19 de abril de 2018, en causa Rol 260-2017, y también por la Excma. Corte Suprema, en el Ingreso Rol 13.097-2018, que rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los condenados.

Afirma, que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad





Foja: 1

según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Menciona, que estos crímenes intolerables para la humanidad, como los que ahora se relatan, han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile en el caso de autos.

Expone, que el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Precisa, que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito del derecho público.

Expresa, que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado, resulta necesario remitirnos al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad. Señala, que allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo 1 inciso 4º de nuestra Carta Fundamental prescribe que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”*. En concordancia con lo anterior, el artículo 5 inciso 2º reafirma que *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

Sostiene, que la conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización, centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano.



Foja: 1

Añade, que las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado; la que emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Argumenta, que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. Menciona, que concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del cual el Estado de Chile forma parte.

Advierte, que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de respeto de los derechos esenciales del hombre por parte de los Estados. Indica, que tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Expresa, que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos, los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Afirma, que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos



Foja: 1

fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. Agrega, que se trata de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringen los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Destaca, que confirma normativamente esta interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución Política de la República que establece los derechos y deberes constitucionales al señalar de modo categórico que: “*La Constitución asegura a todas las personas [...]*”.

Argumenta, que el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5 inciso 2º, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: “*Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*”.

Agrega, que el artículo 19 N°20 de la Carta Fundamental indica que la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas. Aquí se consagra la idea básica según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común.

Señala, que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto, como es fácil comprender, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a



Foja: 1

las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Expone, un conjunto de razones de texto que llevan a sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1) Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del Art. 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste –“secuestro permanente”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional.

2) Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Advierte, que la regla del Art. 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (Art.2329, N°1)-, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

Expresa, que el hecho de que la materia de qué trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional por sobre las meramente privadas, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.



Foja: 1

Destaca, que en efecto, en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona, derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Menciona, que la Convención Americana, tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política, señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Reconoce, que es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, no obstante, hace presente, que la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar o, más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Afirma, que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano, del cual, Chile, por cierto, es parte, trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el artículo 63 del Pacto de San José. Expresa, que por lo tanto, en Chile, dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano, la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Indica, que esta obligación del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros.

En el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, comenta que el artículo 3 del Convenio IV de La Haya relativo a las "*Leyes y costumbres de la guerra terrestre*" (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una



Foja: 1

indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Se refiere además, a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de iuscogens. Añade, que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1° de Agosto de 2009, que en su artículo 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] *La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación*”.

Expresa, que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “*Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer:

“[...] *La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:*

- a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;*
- b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;*



Foja: 1

c) *Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y,*

d) *Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante”.*

Argumenta, que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] *Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional”.*

Señala, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidad, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “*Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*”. Allí se lee, en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción, que: “*La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación*”.

Precisa, que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el jus in bello.

Afirma, que excepciones como la excepción de preterición legal de los hermanos, la excepción de pago y la prescriptibilidad de la acción civil reclamada



Foja: 1

históricamente por el Fisco en el tema de las reparaciones civiles hecha valer en el juicio penal, es un tema definitivamente zanjado por los Sres. Ministros que conocen de causas por violaciones de los derechos humanos, lo que ha sido ratificado por la Segunda Sala Penal de la Excmá. Corte Suprema, fallando a favor de la pretensión de las víctimas directas y sus familiares, sintonizando de esa manera los jueces aludidos con la normativa internacional que propende a esa reparación mediante instancias expeditas y no dilatorias.

En cuanto al daño provocado y el monto de la indemnización, afirma que existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que, como pareja de Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, le ha tocado soportar a la demandante.

Expresa, que la dolorosa y terrible situación a la que se ha visto enfrentada, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Expone, que daño moral es aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es, un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

Expresa, que esta forma de conceptualizar el daño moral es coherente con la forma en que la doctrina chilena y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, lo ha entendido.

Respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, asegura que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Del sentido común fluye que un familiar, en este caso la pareja, de víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones. Comenta, que desde el momento en que ya se tiene por probado que una persona perdió su vida o vio lesionada su libertad individual y/o su seguridad personal, por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los más cercanos a la víctima habrán resultado ilesos en su fuero interno, sus afectos y emociones, luego de los delitos cometidos. Por eso es que, para un sector importante del foro judicial al cual adhiere este libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego,





Foja: 1

entonces, se infiera como consecuencia necesaria el daño sufrido, con ocasión del hecho ilícito cometido.

Menciona, que en la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. Señala, que en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las afectaciones a su derecho a la vida o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que dicho padecimiento resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento.

Hace presente, que los órganos encargados de la Administración de Justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran. Señala, que por ello, solicita que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$200.000.000 a doña Violeta Susana Flores Martínez, a título de indemnización por el daño que se le ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en la persona de su pareja, don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, por parte de agentes del Estado de Chile.

Previa invocación de jurisprudencia, doctrina y disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$200.000.000 a doña Violeta Susana Flores Martínez, con ocasión de los crímenes cometidos respecto de su pareja, don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, ilícitos cometidos por agentes del Estado de Chile y ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

**SEGUNDO:** Que, en su contestación, la demandada solicita el rechazo total de la demanda.

Opone en primer lugar la improcedencia de la indemnización, por haber sido preteridos legalmente la demandante.



Foja: 1

Explica que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así, porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales –que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos, acontecidos en nuestro país.

Añade, que no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Menciona, que en este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$ 247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$ 648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$ 41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$ 23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y



Foja: 1

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$ 1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 23.388.490.737.-

En consecuencia, detalla que a diciembre de 2019, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Afirma, que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sostiene, que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Afirma, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Refiere que en el Derecho Comparado, en el Common Law, se alude al concepto de “loss of consortium”; esto es, el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. En el Derecho estadounidense se alude al concepto de “loss of society”, que se refiere a la noción de control, poder marital. Por su parte, en Inglaterra, se menciona el “dependant law”, en donde ocupan el primer y excluyente lugar el o la cónyuge y los hijos. También en Sudamérica, específicamente en Argentina, esta materia se encuentra resuelta en el artículo 1098 del Código Civil, según el cual, esta acción de satisfacción está limitada a los herederos forzosos.

Indica que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el



Foja: 1

inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Advierte, que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fue preterido por la ley como beneficiario de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

En suma, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de los causantes.

En segundo lugar, afirma que sin perjuicio de lo anterior, la demandante ha obtenido reparación satisfactiva. Advierte, que el hecho que la demandante no haya tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta.

Indica, que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Comenta, que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.



Foja: 1

Precisa, que estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N°19.123, para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Al respecto, hace presente, que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

Señala, que ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, -siguiendo el referido Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. De esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto.

Asegura, que puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniaria, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Menciona, que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Expresa, que en el caso de las personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica. Cita como ejemplo las siguientes:



Foja: 1

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Agrega, que la actora de autos es titular por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).



Foja: 1

Afirma, que el cúmulo de reparaciones indicadas han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Advierte, que diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente *“reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Menciona, que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto, que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos.

Indica, que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización, lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Comenta, que aun, entonces, de ser efectivo que la demandante pudo no percibir una reparación expresada mediante pagos en dinero, en tal caso, como extensamente se ha expuesto y también lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso “Almonacid”, las políticas de reparación asumidas por el Estado por violación a los derechos humanos, entre las cuales están las reparaciones simbólicas ya referidas, los programas de beneficios educacionales y el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), significan también reparación a los familiares de víctimas de derechos humanos.

Sostiene, que estando entonces la acción de autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida por la demandante ya individualizada, por haber sido ya indemnizada por el secuestro y homicidio de su pareja don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, mediante el conjunto de reparaciones



Foja: 1

de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha señalado precedentemente.

En subsidio, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes.

Menciona, que según lo expuesto en la demanda, la desaparición de don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo ocurrió el 25 mayo de 1976.

Explica, que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de la notificación de la demanda de auto, esto es, el día 08 de junio de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Hace referencia a generalidades sobre la prescripción, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”*. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Expresa, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a





Foja: 1

situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”*.

Menciona, que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Señala, que efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Indica, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso primero del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Señala que fundamento de la prescripción, es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Expone que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva



Foja: 1

esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Añade, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, asegura que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Advierte, que el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

A continuación y haciendo referencia a la jurisprudencia sobre la materia, cita la sentencia del pleno de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013 (Rol 10.665-2011), sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros



Foja: 1

de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

5°) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

Añade que existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos al de autos.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, indica que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Argumenta, que sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la



Foja: 1

naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Finalmente y respecto a normas contenidas en el Derecho Internacional en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que su parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Explica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero señala -tal como lo ha reconocido la Excm. Corte Suprema que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “*Principios de Cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de



Foja: 1

guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Añade que en relación a esta Convención, debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Insiste que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. Advierte, que la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Agrega, que lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sres. Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, el fiscal subrogante Sr. Carlos Meneses y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro y Oscar Herrera.



Foja: 1

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

Concluye señalando, que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es por ello, que indica que con el mérito de lo expuesto precedentemente, el Tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En cuanto al daño e indemnización reclamada y en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización.



Foja: 1

Precisa, que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Menciona, que ha dicho la Excma. Corte Suprema: *"Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido"*.

Expone, que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Argumenta, que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, asegura que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de preterición, reparación satisfactiva, y de prescripción, estima que la regulación del daño moral debe considerar, en lo que corresponda, los pagos recibidos a través de los años por la actora de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123; 19.980) y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales concedieron, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Expresa, que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual



Foja: 1

contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente, que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Además de lo alegado, añade que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Afirma, que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Expresa, que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostiene que respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Previa invocación de disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, acoger las alegaciones, excepciones y defensas opuestas, y rechazarla en todas sus partes, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**TERCERO:** Que, la demandada evacuó la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

Respecto a las excepciones de “reparación satisfactiva o integral”, hace presente que la demandante no solamente fue pareja de hecho de la víctima Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, sino que fue madre de su hija o hijo nacido en el Hospital Barros Luco, desconociéndose hasta hoy su paradero. Afirma, que ellos formaron una familia juntos. Comenta, que por esta trágica circunstancia, doña Violeta Flores no





Foja: 1

pudo obtener la pensión y beneficios que la Ley 19.123 otorga a las madres de hijos de filiación no matrimonial de víctimas calificadas por la “Comisión Rettig”, de acuerdo al artículo 20 en relación al artículo 17 de dicha ley.

Expresa, que más allá de que las pensiones establecidas en la referida ley y sus posteriores modificaciones, estas sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Afirma, que la demandante no recibe dinero alguno del Estado por estos daños causados a su persona, y las reparaciones simbólicas a las que hace alusión el demandado en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por ella, a quien le fue quitado el amor de su vida, con quien tenían un plan de vida juntos e, incluso, tuvieron una hija, que le fue arrebatada cruelmente, persistiendo su búsqueda hasta la actualidad.

Precisa, que aquí no está demandando alguien ajeno al núcleo familiar más cercano de la víctima don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo.

Advierte, que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener los familiares, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Sostiene, que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Hace presente, que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la demandante. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile a ciertos familiares de las víctimas implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega. Más aún reconoce el deber de indemnizar, cuestión que debiera hacer en todo caso con la demandante.

Indica, que la propia Ley N°19.123 que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que: “*Le corresponderá especialmente a la Corporación: (...) 2.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas*”. Comenta, que promover no es sinónimo de reparar, y agrega, que en el caso de la demandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece por la desaparición de su familiar, y de todo el proyecto de vida que con ello se ha destruido. El sentimiento de injusticia y de no haber sido compensada, ni reparada ni indemnizada, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.



Foja: 1

Señala, que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia o estas reparaciones simbólicas o beneficios con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24, que dispone que *“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*. Expresa, que entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión, o de la entrega de ciertos beneficios como ocurre en este caso concreto. Sostiene, que al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de las leyes de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción de pago o reparación satisfactiva invocada por el Fisco.

Advierte, que el artículo 76 de La Constitución Política de La República, establece que: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*. Comenta, que en virtud de este artículo, el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 para decir que el daño moral ya está reparado, llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Precisa, que si se aceptara la tesis Fiscal, en el caso del monto de la reparación que han recibido las víctimas, estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, en este caso el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo.

Respecto a las fuentes de derecho aplicables, indica, que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Comenta, que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido persistentemente



Foja: 1

aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos.

Asegura, que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado.

Añade, que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”; alegación, esta última, que resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Agrega, que dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En cuanto a la prescripción, argumenta, que la acción constitucional establecida en el artículo 38 inciso 2º de la Constitución Política de la República, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, no establece plazo de prescripción.

Además, el demandado no reconoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “*Convención Americana sobre Derechos Humanos*”. Expone, que el Estado de Chile soberanamente ha adquirido una obligación internacional de reparar adecuadamente a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Dicho deber está establecido claramente en normas como el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de una enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace ya varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo.



Foja: 1

Afirma, que sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Expone, que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. Comenta, que la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. Advierte, que pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional.

Argumenta, que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en



Foja: 1

las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Afirma, que es un principio jurídico mundialmente reconocido por todas las sociedades democráticas de que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.

Advierte que en un Estado de Derecho real - y no aparente – el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Respecto a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, expresa que la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

En relación al monto de lo demandado, hace presente que la ley exige peticiones concretas. Señala, que no hay dinero que supla el daño experimentado por la demandada. Menciona, que en lo petitorio solicita que se condene a “la suma que el Tribunal considere en justicia”.

Respecto a los reajustes, argumenta, que una correcta aplicación del artículo 1557 en relación al artículo 1551 del Código Civil, normas aplicables supletoriamente al estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado, determinaría que los reajustes e intereses aplican desde la fecha de interposición de la demanda.

Prevía invocación de disposiciones legales, jurisprudencia y doctrina que estima pertinentes, tener por evacuada la réplica en los términos señalados.

**CUARTO:** Que, el demandado evacuó la dúplica, reiterando todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas en el escrito de contestación a la demanda y con el mérito de ellas solicitó el rechazo de la acción deducida.

Respecto de la excepción de improcedencia de la indemnización, por haber sido preterida legalmente la demandante; argumenta, que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la justicia transaccional, tanto en el derecho interno como en el internacional. Añade, que sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria; ello, porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad



Foja: 1

de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas.

Comenta, que no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales –que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Advierte, que no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Relata, que en este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Expone, que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará.

Menciona, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.



Foja: 1

Detalla, que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Señala, que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fue preteridos por la ley como beneficiario de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

Sostiene, que la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a personas vinculadas por lazos distintos a los previstos en la ley 19.123.

Afirma que la Ley 19.123 no es compatible con la indemnización que en autos se persigue. Expone, que el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc y por eso es integral y no sólo una denominación, como alega en su réplica. Advierte, que si se considera lo que significa en gastos para el Estado y la sociedad en su conjunto resulta claro que persiguió reparar el daño moral.

Asegura, que esa pensión tuvo un claro fin reparatorio del daño moral, nunca tuvo el carácter de “pensión de sobrevivencia”, como la han llamado, como aquellas que se otorgan a quienes no han podido obtener una pensión con sus fondos, por ej, por no haber cotizado, las cuales no superan los cien mil pesos.

Reitera, que el fallo pronunciado por la corte Suprema, en los autos caratulados “DOMIC BEZIC, MAJA y otros con FISCO”, recogió similar alegación formulada en ese juicio.

En cuanto a la prescripción, argumenta, que durante más de 10 años la Corte Suprema consideró invariablemente que la acción prescribía conforme a lo dispuesto en el artículo 2330 del Código Civil, en 4 años.

Señala, que la afirmación que se estampa en la demanda de autos no ha sido una cuestión pacífica, ya que a diferencia de lo sostenido en la réplica, también existe



Foja: 1

una nutrida jurisprudencia que reconoció el carácter prescriptible a la acción deducida en autos. En cuanto a las alegaciones vertidas por la parte demandante relativas a al monto demandado y los reajustes e intereses, da por reproducidos en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

Previa invocación de jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por evacuada la dúplica, y con su mérito, rechazar la demanda de autos.

**QUINTO:** Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos:

**Prueba Documental:**

Al folio 1:

1. Certificado suscrito por la (ahora ex) Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doña Lorena Recabarren Silva, por el que se certifica que el señor Ángel Gabriel Guerrero Carrillo fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, además de la copia de la página donde constan las circunstancias de los hechos ocurridos a la víctima en el informe de dicha comisión.
2. Fallo causa Rol 2182-98 Episodio Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, sustanciada ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago Sr. Miguel Vásquez Plaza, de fecha 28 de octubre de 2016.
3. Fallo de segunda instancia dictado en el Ingreso Rol 260-2017 (Criminal) por la Duodécima Sala de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19 de abril de 2018.
4. Sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema, en Ingreso Rol 13.097-2018 con fecha 27 de julio de 2020.
5. Sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema, Ingreso Rol 13.097-2018 con fecha 27 de julio de 2020.

Al folio 24:

1. Informe Psicológico de Daño, suscrito por la psicóloga clínica doña Paula Hinojosa Oliveros y la coordinadora doña Carolina Rojas Stapel del Programa





Foja: 1

PRAIS, de fecha 31 de agosto de 2023, respecto de la paciente doña Violeta Susana Flores Martínez.

2. Copia de la Norma Técnica N° 88 “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 – 1990”.
3. Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.
4. Contestación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, de fecha febrero de 2018.
5. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 9 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 16950-2019, caratulada “Calderón con Fisco de Chile”.
6. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 6 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 18179-2019, caratulada “Torres con Fisco de Chile”.
7. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 24 de diciembre de 2021, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 13877-2019, “Episodio Augusto Ramón Cepeda Venegas”.
8. Sentencia de casación dictada con fecha 13 de junio de 2018, por la Excma. Corte Suprema, en el ingreso Rol 8105-2018, “González con Fisco de Chile”.
9. Sentencia de casación dictada con fecha 26 de febrero de 2019, por la Excma. Corte Suprema, en el ingreso Rol 31363-2018, “Fernández con Fisco de Chile”.

### **Prueba Testimonial.**

A folio 29, rindió prueba de dos testigos:

En primer lugar comparece doña Ana Del Carmen Guerrero Carrillo, hermana de don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, quien relata que conoció a doña Violeta Susana Flores Martínez en el año 1975, cuando don Ángel Gabriel se encontraba en la clandestinidad, dado que estaba siendo buscado por los aparatos de seguridad.



Foja: 1

Indica, que su hermano, le envió un mensaje a través de Violeta, para saber de sus padres.

Menciona, que vio a la demandante en 2 o 3 oportunidades, porque a fines del año 1975, se enteró que ella estaba embarazada de su hermano. Expresa, que después de esa ocasión, no volvió a saber de ella, hasta el año 1975, cuando su hermano fue detenido, y supo que doña Violeta, había perdido el bebé que estaba esperando. Añade, que después supo que la demandante dio a luz, pero el hijo desapareció.

Reitera que conoció a la demandante en el año 1975, cuando llega el mensaje de su hermano. Reconoce, que no sabe si eran pareja, pero detalla, que si lo eran, no fue una relación duradera, porque habría empezado desde el año 1974, cuando a otro hermano lo tomaron detenido, en atención a que desde ese año, Ángel Gabriel se fue de la casa, por lo que la relación fue desde el año 1975 a 1976. Precisa, que no pudo haber sido más tiempo que eso.

Advierte, que en el transcurso que la demandante perdió a su hijo, existió daño emocional y daño moral.

En segundo lugar, comparece doña Ana del Carmen Terrada Escobar, quien expone que conoce a la demandante desde el año 1975, porque eran vecinas de barrio.

Respecto a los perjuicios, afirma que estos existen y derivan de la pérdida de su compañero y la pérdida de su hija.

Afirma, que fue ella quien la acompañó al hospital Barros Luco a buscar toda la documentación del nacimiento de su hija.

Detalla, que ella nunca vio a la bebé.

Expresa, que en el hospital le dijeron que la demandante nunca había parido en ese hospital y que no tenían ningún documento de que había tenido a su bebé.

Sostiene, que todos sabían que estuvo embarazada, de lo que sucedió y de la detención de su pareja.

Comenta, que la demandante no pudo desarrollarse profesionalmente producto de lo vivido, dado que siempre está con psicólogo, psiquiatra, y tomando medicamentos.



Foja: 1

Asegura, que la demandante manifiesta recuerdos de su pareja Ángel Gabriel, dado que mantiene hasta el día de hoy relación con su familia.

Reitera, que la pareja de la demandante estuvo detenido y desaparecido. Detalla, que este era el padre de la bebé que se le informó que había muerto. Afirma, que este cúmulo de cosas nunca le permitieron desarrollarse. Asegura, que la demandante es muy asustadiza, siempre tiene que estar acompañada, no sale sola a la calle, por lo que concluye que los traumas relatados le impidieron estudiar y desarrollarse.

Agrega, que la pérdida de su pareja le significó problemas económicos en la vida posterior de la demandante, ya que él tenía 24 años y era el proveedor de esa familia. Precisa, que Ángel estudiaba y trabajaba, y era quien mantenía la familia, el embarazo y a ella.

**SEXTO:** Que, la parte demandada solicitó oficio al Instituto de Previsión Social para que informe al Tribunal sobre los beneficios percibidos conforme a las leyes de reparación 19.123 y 19.980, y demás leyes pertinentes, por los familiares de la víctima don Angel Gabriel Guerrero Carrillo, requiriendo el monto global del dinero y beneficios que hubieren recibido a la fecha; oficio que fue acompañado a folio 14.

**SÉPTIMO:** Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por las detención y asesinato de don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, quien fue detenido el 26 de mayo de 1976 y posteriormente asesinado.

**OCTAVO:** Que, de los documento individualizados como *“Certificado por el que se certifica que el señor Ángel Gabriel Guerrero Carrillo fue reconocido como víctima por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, además de la copia de la página donde constan las circunstancias de los hechos ocurridos a la víctima en el informe de dicha comisión”*; del Fallo causa Rol 2182-98 Episodio Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, sustanciada ante el Ministro en Visita Extraordinaria de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago Sr. Miguel Vásquez Plaza; el Fallo de segunda instancia dictado en el Ingreso Rol 260-2017 (Criminal) por la Duodécima Sala de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 19 de abril de 2018; de la Sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema, en Ingreso Rol 13.097-2018 con fecha 27 de julio de 2020; y de la Sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema, Ingreso Rol 13.097-2018 con fecha 27 de julio de 2020; se tuvo por acreditado en el proceso, que don Ángel Guerrero



Foja: 1

Carrillo, fue declarado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como víctima de violaciones a los derechos humanos, quien desapareció el 25 de mayo de 1976.

Además, caber señalar que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia la preterición legal de los demandantes, y en si la acción indemnizatoria deducida por la actora se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

**NOVENO:** Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir que estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad del Estado de Chile, tal como da cuenta el informe señalado.

Asimismo, se tendrá presente que este punto, la responsabilidad del Estado, no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que la demandante, ha sido reparada satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en contra de don Ángel durante la época de la dictadura.

En consecuencia, se tendrá por acreditado que el secuestro y asesinato de don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la*



Foja: 1

*administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”,* responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.

**DÉCIMO:** Que, en primer lugar y respecto a la excepción de preterición legal del demandante, indicando fundamentalmente que la indemnización no puede alcanzar a la demandante, en calidad de pareja de la víctima, resultan inconsistentes los fundamentos de esa parte, toda vez que no existe norma alguna que excluya a la pareja, del derecho a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial.

No es efectivo que nuestra legislación establezca un orden de prelación genérica para todas las instituciones jurídicas existentes. Por el contrario, cuando nuestro legislador ha querido establecer una prelación lo ha hecho expresamente, como por ejemplo en materia penal, o en materia de derecho sucesorio, o en la Ley N° 16.744. Todo lo anterior, no ocurre en el caso de la indemnización de perjuicios por daño moral, menos aún en aquellas causas que se sustentan en crímenes de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores tampoco ha hecho tal distinción, es así que un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, en esta misma materia, confirmó la indemnización de perjuicios, por el secuestro calificado de la hermana de los actores de aquella causa, cometidos por agentes del Estado (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol. Criminal N°: 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014, considerando Décimo Sexto). En este mismo sentido, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de segunda instancia, restableciendo la indemnización de perjuicios a favor de la querellante, quien era pariente por consanguinidad en cuarto grado en la línea colateral, es decir “primo” (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, conocido como “Nilda Peña Solari”, parte resolutive).

Cabe citar también, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resulta del todo pertinente citar también, a saber causa Rol N°4827-2020 de fecha 24 de febrero de 2021, la que en lo pertinente señala:

*“Décimo: Que, respecto de doña María Teresa Ugarte Bruna, debe consignarse que ella era **pareja de hecho** de la víctima a la época de la detención y muerte de don Leandro Arratia Reyes, tuvo un hijo con él y ha padecido el dolor de la pérdida*



Foja: 1

*de un ser amado, padre de su hijo, evidenciando una afectación psicológica importante, lo que ha quedado acreditado en el proceso con la prueba testimonial y documental aportada para este efecto.*

*Por otra parte, ha sido superada la controversia de si es o no procedente indemnización para la conviviente o pareja de hecho de una víctima, por lo que acreditado el supuesto fáctico que lo determina, no existe razón que permita excluirla de la indemnización que pretende, por lo que será oída en su solicitud y habrá de acogerse la demanda a su respecto”.*

**UNDÉCIMO:** Que, en el fallo causa Rol 2182-98 Episodio Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, de fecha 28 de octubre de 2016, acompañado al anexo de folio 1, se da cuenta que doña Violeta Susana Flores Martínez, rindió testimonio señalando que convivía con Ángel Guerrero en La Cisterna. Además, declaró circunstancias relevantes respecto a la detención de la víctima.

Cabe destacar, que dicho documento, es un instrumento público, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1700 del Código Civil, hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, y respecto a las declaraciones, hace plena fe contra los declarantes.

Por su parte, de la prueba testimonial de folio 29, se desprende que ambas testigos son contestes en que la demandante se encontraba embarazada de don Ángel Guerrero Carrillo. Que, conforme al artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, la declaración de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, podrá constituir plena prueba cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario; situación que no se observa en autos, toda vez que la demandada no negó los hechos.

Que, las circunstancias señaladas, y en conformidad a lo establecido en el artículo 1712 del Código Civil, y 426 del Código de Procedimiento Civil, permite presumir a esta sentenciadora, la existencia de una relación entre la demandante y la víctima, por lo que en atención a lo expuesto precedentemente y tal como se declarará en la parte resolutive de este fallo, se rechazará la alegación hecha por la demandada en cuanto a declarar la preterición legal de la demandante en su calidad de pareja de don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo.

**DUODÉCIMO:** Que, la parte demandada opuso también la excepción de existencia de reparación satisfactiva obtenida por la demandante. Al respecto cabe



Foja: 1

tener presente que la Ley N°19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. Cabe señalar además, que la demandada no acreditó en estos autos si la demandante recibe alguno de los beneficios a que hace referencia, toda vez que el oficio DSGT N° 4792-15064, da cuenta que solo la madre de la víctima recibe beneficios de reparación.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las



Foja: 1

disposiciones de derecho internacional que conforman el ius cogens que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

**DÉCIMO TERCERO:** Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que la demandante sea beneficiaria de un sistema de previsión de salud especial, según se desprende del certificado PRAIS, acompañado por la propia demandante; de gestos simbólicos u otras medidas análogas, que por lo demás no han sido acreditadas en estos autos, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenida por la demandante.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron el 25 de mayo 1976, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil; se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.





Foja: 1

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente



Foja: 1

ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

*“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”*

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

*“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.*

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.



Foja: 1

Cabe señalar también, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos precedentes de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N°19.123 y N°19.980 y las reparaciones simbólicas, en el caso que el demandante fuera beneficiario de ellas, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, corresponde analizar la procedencia de indemnizar a los demandantes, por el daño moral con ocasión del asesinato de don Ángel Gabriel, cometido por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las



Foja: 1

excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, atendido lo razonado en el considerando undécimo, y habiéndose determinado la existencia de una relación entre la demandante y don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, víctima de violación a los derechos humanos; se tendrá por acreditada la relación de parentesco entre estos, más aun considerando que no fue un hecho discutido en la presente causa.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, la relación descrita, ya basta para tener por acreditado el daño moral sufrido alegado, en atención a que la demandante se encontraba embarazada de la víctima, según se desprende de la testimonial de folio 29, presumiéndose con claridad que su pérdida causó un gravísimo desconsuelo, pesar y dolor, más aun considerando las terribles circunstancias del hecho que motivan la presente causa como es secuestro y posterior asesinato de la pareja de la demandante, y padre de su hijo cuyo destino se ignora hasta la actualidad; lo que trastornó gravemente su entorno familiar, todo debido a un actuar horrendo llevado a cabo por agentes del Estado.

Que, para acreditar el daño moral alegado, la demandante acompañó informe psicológico de evaluación de daño, de fecha 31 de agosto de 2023, realizado por doña Paula Hinojosa Oliveros, psicóloga del PRAIS, documento que da cuenta que la demandante sufrió la desaparición de su pareja. En el informe se relata, que habría conocido a Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, en el año 1973, iniciando la



Foja: 1

relación a sus 16 años de edad. Además, se indica que la demandante se encontraba embarazada la última vez que lo vio.

En el informe, se señala que de la evaluación realizada fue posible observar indicadores que permiten dar cuenta de un trauma complejo en la demandante. Se detalla, que la demandante padece un trastorno de estrés postraumático que ha rigidizado sus emociones al nivel de no involucrarse afectivamente con nadie.

Cabe destacar, que los testigos reconocen que la demandante se encontraba embarazada de don Ángel, constituyendo plena prueba, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 modificada posteriormente por la Ley N° 19.980 en su artículo 2° en relación con el artículo 18 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños y conceden a los familiares de las víctimas calificadas por violación a los derechos humanos beneficios de carácter económico o pecuniario (Sentencia Corte Suprema Rol N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, considerando Décimo).

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes, debido al secuestro calificado y desaparición cometido por agentes del Estado en contra de la pareja de la demandante, don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

Que, en cuanto al documento “Copia de la Norma Técnica N° 88 Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 – 1990”, en cuyo capítulo II, punto 2, se refiere a los efectos bio-psicosociales asociados a la experiencia traumática de, entre otras, los familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, es necesario indicar que si bien este informe es de carácter genérico, viene a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.



Foja: 1

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijadas por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Al respecto cabe señalar que la Ley N°19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere haber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Además, es pertinente señalar que la demandada no acreditó si el actor es beneficiario de alguno de estos beneficios, ni el monto de estos si es que fuera efectivo.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan



Foja: 1

hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros no encuentra asidero jurídico alguno en nuestra legislación, consistiendo esa defensa simplemente en una extensión de la excepción de preterición ya rechazada, por lo que se rechazará la alegación de tener en consideración los pagos efectuados a otros familiares para tener en consideración al momento de regular el monto a pagar del daño moral.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del stare decisis (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por la demandante, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es el secuestro y asesinato de un joven de 24 años de edad, implicando ello que sus familiares, incluida la demandante de autos, hayan padecido dolor y secuelas psicológicas; ello con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la demandante de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por el demandante, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y



Foja: 1

seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos don Ángel Gabriel Guerrero Carrillo.

Que, habiendo el Estado truncando la vida familiar, durante tan largo tiempo, situación que se mantiene hasta esta fecha; corresponde ahora que les devuelva en alguna medida a su amparo, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

En consecuencia y según lo expuesto, encontrándose acreditada la comisión del delito, la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron y la relación de parentesco de la víctima y los demandantes, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la desaparición y la irresolución del destino de un familiar en tan vitandas circunstancias.

Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior y ante la urgencia de la demandada de revisar la jurisprudencia anterior, a efectos de fijar el monto de la indemnización han de servir como inspiración, los siguientes fallos:

Que, en sentencia en causa Rol 4827-20, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se determinó que:

*“Que, respecto de doña María Teresa Ugarte Bruna, debe consignarse que ella era pareja de hecho de la víctima a la época de la detención y muerte de don Leandro Arratia Reyes, tuvo un hijo con él y ha padecido el dolor de la pérdida de un ser amado, padre de su hijo, evidenciando una afectación psicológica importante, lo que ha quedado acreditado en el proceso con la prueba testimonial y documental aportada para este efecto.*

*Por otra parte, ha sido superada la controversia de si es o no procedente indemnización para la conviviente o pareja de hecho de una víctima, por lo que acreditado el supuesto fáctico que lo determina, no existe razón que permita excluirla de la indemnización que pretende, por lo que será oída en su solicitud y habrá de acogerse la demanda a su respecto.*

**Undécimo:** *Que, en relación al quantum de las indemnizaciones fijadas por el sentenciador de primer grado, que aparece cuestionado tanto por la demandante civil como por el Fisco de Chile, cabe consignar que el daño ha sido conceptualizado como todo menoscabo que experimenta un individuo en su persona y bienes; como la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de*





Foja: 1

*orden patrimonial o extrapatrimonial. Dicho daño, eso sí, debe ser cierto, no bastando un perjuicio actual o hipotético.*

*Por otra parte, el daño puede ser material o moral. El primero consiste en una lesión de carácter patrimonial, en este caso la víctima sufre un menoscabo o disminución en su patrimonio. El daño moral, por su parte, consiste en el dolor, la aflicción, el pesar que se le causa a la víctima por el hecho ilícito.*

**Duodécimo:** *Que siguiendo esta línea argumental, en lo tocante a la suma pretendida por concepto de daño moral, doscientos millones de pesos para cada uno de los demandantes (pareja e hijo), y ciento veinte millones de pesos para las actoras hermanas de la víctima, lo cierto es que de los antecedentes de autos aparece que efectivamente ha sido acreditado el daño moral sufrido por los demandantes, como quedó claramente establecido en el fallo que se revisa, siendo la suma pedida, en concepto de esta Corte excesiva, conforme a los parámetros aplicados sobre la materia por estos sentenciadores.*

**Décimo tercero:** *Que, para determinar el quantum, a más de los aspectos comúnmente aplicados, esto es, grado de parentesco, cercanía y relación con la víctima, estos sentenciadores diferencian, por su puesto analizando caso a caso, lo que se otorga a los cónyuges o convivientes o parejas respecto de aquello que se da los hijos y hermanos.*

*Lo anterior, considerando la circunstancia que la regla general es que el mayor dolor sufrido, se configura en el momento de la detención y presencia en la época de ocurrencia de los hechos, que generalmente lo sufre la pareja de la víctima, quien debe continuar con su vida cuidando y protegiendo a su hijo, llevando en sus hombros el dolor y la angustia de la pérdida de su ser amado.*

*En el caso de los hijos, por supuesto que existe un daño que debe ser reparado, pero su cuantificación monetaria, se estima debe ser menor que la que corresponde a su madre, pareja de la víctima.*

*Misma argumentación vale para cuantificar el monto a otorgar a las hermanas, las que efectivamente han sufrido la pérdida de un ser querido, pero que en todo caso, habrá de ser menor que la del hijo y pareja de la víctima.*

*Conforme lo dicho, se estima juicioso establecer la procedencia de la indemnización por daño moral para doña María Teresa Ugarte Bruna, la que se regula en la suma de \$80.000.000”.*



Foja: 1

Por su parte, en voto disidente de la Ministra Retamales, en causa 6213-2019, de la Corte de Apelaciones de Santiago, se expresó:

*“Cuarto: Así las cosas, resulta que según el criterio de fallecidos hombres, entre 30 y 40 años, (víctima tenía 37) tratándose de la conviviente demandante, de un rango etario entre los 20 y 30 años, (demandante tenía 29) vivía con la víctima, se arriba a un universo de 6 causas, donde en el 50 % de los casos se ha otorgado una indemnización que va entre las 235 UF y las 525 UF, estimándose del caso asignar en el caso de autos la indemnización correspondiente a tramo más alto del mayor porcentaje de casos encontrados, determinándose, de ese modo, la indemnización en el equivalente a 525 UF”.*

En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración que en prueba testimonial de folio 29, la testigo doña Ana del Carmen Guerrero Carrillo, hermana de don Ángel; declaró no saber si la demandante y la víctima eran pareja, advirtiendo que en caso afirmativo esta no fue una relación duradera, indicando que esta habría durado a lo más desde el año 1975 a 1976; y en atención a que muchos de los perjuicios señalados por ambas testigos en la testimonial de folio 29, y en el informe psicológico ya analizado; se refieren a perjuicios derivados del secuestro y tortura vividos personalmente por la demandante y la desaparición de su hijo; daños que no fueron demandados en autos, se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de la demandante en la suma de \$10.000.000.

**VIGÉSIMO:** Que, la suma se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en cuanto al resto de documentos acompañados, individualizados mas no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.



Foja: 1

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que se RECHAZA la excepción de preterición legal de los demandantes.

II.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva al actor.

III.- Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

IV.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

V.- Que se RECHAZA la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

VI.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a pagar en favor de la demandante la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos), para la demandante doña Violeta Susana Flores Martínez.

VII. Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

VIII.- Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

IX.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.



C-7564-2023

Foja: 1

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

**DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, seis de Mayo de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JWPKXNXETXJ